

Revista
Insurreción
@eln_voces
Edición No.571
Marzo/06/2017

SUMARIO


@eln_voces



Fortalecer la Paz en la

Campaña Electoral

Se activa por estos días la campaña electoral desde las diferentes esquinas políticas y sin duda la paz en sus diferentes interpretaciones está allí, bien para proyectarla a favor de las mayorías o por el contrario para hacer de ella un beneficio para las minorías adueñadas del poder.

El ELN se dispone a encontrar caminos con las fuerzas democráticas y de izquierda en los que sus campañas fortalezcan la Salida Política al Conflicto, se comprometan con el proceso de paz con cambios y la participación de la sociedad en él.

En tal sentido es indispensable que se construya un proceso de confluencias, basado en las identidades y que a partir de ellas se desarrolle la campaña en la que se geste un único liderazgo, alcanzado en un proceso democrático interno con la participación protagónica de la sociedad.

Está claro que el ELN por su carácter insurgente no aporta con votos, pero sí está comprometido con el respeto a quienes lo ejercen independientemente de sus preferencias y, dispuesto a aportar en el debate de ideas y la construcción de propuestas de cara a la construcción de una nueva nación.

Consideramos que aun en medio de esta realidad hostil que se siente en el ambiente político y social, que genera peligros para los demócratas y gentes de izquierda, donde cada dos días son asesinados por sicarios al servicio de la extrema derecha, líderes populares o defensores de derechos humanos, la verdadera oposición política debe estar presente en los espacios políticos que así sean reducidos, condicionados y desventajosos para quienes no hacen campaña a favor de las minorías y sus intereses de clase, deben servir para formar, educar, organizar y hacer de ese espacio una tribuna que aporte a los intereses populares y de la nación.

Dentro de este contexto, todo el universo político democrático y las fuerzas de izquierda, debemos trabajar por la creación de un gobierno que tenga como propósito garantizar la salida política

al conflicto mediante un proceso de paz que supere las causas que originaron el conflicto político, social y armado, y proyecte a Colombia en la justicia y equidad social, la democracia y la soberanía.

La Mesa de diálogos de Quito instalada el pasado 7 de Febrero, donde se inicia la discusión de la Participación de la sociedad entre el ELN y el gobierno, es un buen espacio para ventilar las discusiones y el intercambio que aquí planteamos entre todos los que consideramos, que Colombia requiere profundos cambios para garantizar la vida, superar la violencia y alcanzar la convivencia basada en el respeto, la dignidad y la igualdad de oportunidades para asumir los retos que nos plantea el futuro.

Bajo el actual contexto de guerra declarada por nuestros adversarios, sin renunciar a nuestra condición de rebeldes, los colombianos y las colombianas pueden contar con el ELN para ese propósito.

Esta condición no es un capricho idealista, quienes estamos alzados en armas somos el fruto de una realidad político-social que lleva a importantes contingentes de colombianas y colombianos a usar el derecho de ser rebeldes, para asumir la lucha contra un sistema de violencia que desde hace más de 70 años cerró las posibilidades democráticas para que el pueblo acceda al poder por las vías legales.

Esa dolorosa realidad se constata hoy cuando al mismo tiempo que se ofrece la paz, se asesina, desaparece, encarcela y sataniza a quienes luchan, aun desde los espacios legales, por cambiar un sistema de violencia que no ofrece iguales oportunidades para la vida social y política de Colombia.

Aun así, nuestra apuesta por la paz no se detendrá y es por esto que planteamos la convergencia de la acción política de todas y todos quienes nos la jugamos por ella, bajo la premisa de la participación protagónica de la sociedad y la certeza de una paz con cambios.



Defensor del Pueblo Denunica Genocidio

De Líderes Sociales



¡Basta Ya del Asesianto de Líderes y

Lideresas Sociales!



Comunicado N.006

Ayer jueves 2 de marzo, en la comuna 7 de Medellín, fue asesinada Alicia López Guisao, líder campesina de 32 años, quien acompañaba la ejecución de un proyecto de desarrollo, pactado entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Gobierno de Santos.

Alicia López, hacía parte de la Asociación Agroecológica interétnica e Intercultural, Asokinchas, con participación de comunidades indígenas y afro descendientes en el Medio San Juan, en el municipio de Sipí, departamento del Chocó.

Alicia era hija de Rosa López, lideresa del barrio Olaya Herrera, quien también sufrió persecución. En el momento de su asesinato, Alicia, se encontraba visitando a unos familiares en el sector, lugar del que fue desplazada en el año 2002, por amenaza de muerte en medio de la operación militar y paramilitar 'Orión'.

El asesinato de Alicia es parte de un plan de terror hacia el movimiento popular, Afrodescendiente, indígena y campesino que se opone a las políticas de despojo, destrucción ambiental y a la asociación criminal entre los poderes estatales y los escuadrones paramilitares.



Las organizaciones de Derechos Humanos, registraron en el año 2016, 114 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Durante los dos primeros meses de 2017, van asesinados más de 23 líderes, entre ellos seis mujeres. Las lideresas y líderes asesinados están asociados a organizaciones defensoras de los procesos de paz.

Hace 30 años a la Unión Patriótica, que nació de un proceso de Paz le fueron asesinados miles de sus dirigentes. Este genocidio político fue el exterminio de esta organización día a día, gota a gota, mediante asesinatos dispersos en la amplia geografía nacional.

Los gobernantes de entonces, los militares, ministros y fiscales salieron a decir, igual que hoy, que no eran hechos sistemáticos, que los hechos correspondían a problemas personales y delincuenciales causados por fuerzas oscuras.

Igual que hace 30 años, hoy los gobernantes, el fiscal y los jefes de las demás instituciones estatales prometen exhaustivas investigaciones, judicializar a los responsables y perseguir a las fuerzas oscuras.

Hace 30 años las y los colombianas no logramos parar el Genocidio político, es la hora de parar el actual Genocidio; pero no basta con comisiones de alto nivel, se requiere el Dialogo Nacional para encontrar salidas urgentes y ciertas.

¡Colombia para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!

Delegación de diálogos

Ejército de Liberación Nacional



Odebrecht,

El Emperador y el Rey

Este mes de marzo, el escándalo de Odebrecht completa 3 años de estar en los titulares de la prensa mundial.

El escándalo comenzó por las coimas que pagó a la estatal petrolera Petrobrás y ahora la clasifican como "la multinacional de los sobornos"; investigada en 15 países, su juicio se convierte en el más grande, hecho por este delito, contra una empresa en el mundo.

Si todas empresas pagan sobornos para comprar a políticos y burócratas, ¿por qué los reflectores mediáticos apuntan a esta gran empresa brasileña?

Si todas la empresas, de todo el mundo, se hacen "amigas del rey" para acumular capital y poder, ¿en qué marca la diferencia, esta empresa brasileña?

En un mundo globalizado de capital transnacionalizado, en que cada vez menos el capital tiene una identidad nacional, ¿cuáles operaciones de Odebrecht provocaron la ira del emperador y llevaron a que la enviara al fondo de los infiernos?

El oficio más antiguo

Soros el conocido financista, sostiene que "siempre hay alguien que paga, y los negocios internacionales suelen ser la principal fuente de corrupción".

No existe una sola empresa en el mundo, que no consiga licitaciones públicas, por medio de ofrecer sobornos y hacer contratos sobrefacturados.

Cómo negar que el sistema político se lubrica con el dinero de las grandes empresas, con el que financian a los políticos, para que estos cuando llegan al gobierno, se los retribuyan con contratos del Estado y con préstamos públicos de bajos intereses. Esta simbiosis coloca al aparato estatal al servicio de los intereses de una elite súper millonaria, y no del conjunto de la sociedad; de aquí nace la actual crisis de democracia, que azota a todo el mundo.

Es tan antigua esta práctica corruptora, que hay que calificar como una falsa noticia de la historia, aquella que dice que "la prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad".

Lucrarse de todos los reyes

Fundada en el nordeste brasileño en 1944, Odebrecht siempre medró con cada gobierno de turno, fuera democrático o dictatorial, por igual.

Durante la dictadura de Geisel (1974-1979) dio un gran salto de crecimiento, que le permitió abrir operaciones internacionales en 1979 en Perú, y en Angola en 1984.

Su apogeo llegó con el gobierno de Lula (2003-2010), y con la siguiente presidencia de Dilma Rousseff, ambas hechas a nombre del Partido de los Trabajadores (PT). Cuando se convirtió en la primera empresa latinoamericana con negocios en 27 países; multiplicando por seis su facturación, que pasó de 7.700 millones de dólares en 2003, a 45.751 en 2014.

En Brasil, "un informe sobre las elecciones 2006, reveló que las empresas recibieron entre 14 y 39 veces el valor donado a los partidos, en contratos con el poder público" [1]. Por esto, el escándalo cubre al 20 por ciento de los integrantes del Congreso, y a más de 20 partidos brasileños, como el PSDB y el PT; salpica al mismo presidente Temer, quien ha sido involucrado 45 veces en las confesiones hechas por 77 ejecutivos de Odebrecht -sobre el funcionamiento del Departamento de sobornos-, quienes delataron a cambio de beneficios judiciales.

Los jueces brasileños entregaron los expedientes de este caso al Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien en diciembre de 2016, inició su campaña pública de denuncia contra los 2.300 millones de dólares de sobornos entregados por Odebrecht en 10 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República



Dominicana y Venezuela) y 2 de África (Angola y Mozambique) [2].

Odebrecht desde 2004, recibió el 70 por ciento de los fondos, que el banco estatal BNDES, destina para promover negocios en el exterior de empresas brasileñas [3]. Es obvio que esta asociación entre la empresa y el PT, despierta temores en Washington, ahora que el ex presidente Lula es uno de los favoritos, para ganar las siguientes elecciones presidenciales. Por lo que esta sería la primera causa del ataque que le hacen los EEUU a esta empresa.

A los EEUU también les molesta la expansión internacional de Odebrecht, que se verá frenada por los controles que en el futuro recaerán sobre ella, mermándole la posibilidad de competir de igual a igual, con empresas de otras partes del mundo.

La ira imperial

Brasil junto a otras naciones suramericanas desde inicios de este siglo, han liderado la consolidación de un bloque regional soberanista y autodeterminado, que entre otros avances, ha logrado estructurar una doctrina de seguridad propia, por fuera de la tutela de los EEUU.

Washington considera un obstáculo para sus pretensiones imperialistas, que se vuelva realidad la Estrategia Nacional de Defensa, aprobada por Lula en 2007, cuyos propósitos principales son:

"La protección de la Amazonía, estableciendo una segunda base naval en la desembocadura del Amazonas, y la defensa de los yacimientos de petróleo en la plataforma marítima (pre-sal), las mayores reservas encontradas en el mundo en décadas" [1].

Para lo cual, Brasil convino con Francia un plan de construcción de navíos, incluyendo varios de propulsión nuclear. Proyectos en los que Odebrecht tiene un rol principal.

Estos planes de defensa propios de la soberanía de los países -en Brasil como en todas partes-, integran a los complejos industriales militares con empresas privadas. Entonces, ¿qué causa la ira de los EEUU?

La ira la comparte la derecha brasileña con Washington, porque ambos se han opuesto desde siempre a que Brasil adelante proyectos de defensa, que usen energía nuclear.

<defesaneet.com.br>, una de las principales páginas militares del país, señala que existe un interés geopolítico por impedir que Brasil desarrolle sus capacidades de defensa.

Notas.

[1] Raúl Zibechi. "Odebrecht es la clave del complejo industrial-militar brasileño". Sputnik Mundo. 24.02.2017.

[2] Análisis de Mario Osava, editado por Estrella Gutiérrez. "Corrupción desmorona un imperio: el brasileño de Odebrecht". International Press Service (IPS). 14.02.2017.

[3] Agnese Marra. "Odebrecht, el imperio de los sobornos". Contexto y Acción <http://ctxt.es>. 02.02.2017.

Lucía Serrano



Los Dos Caras

De la Sustitución

Mientras los acuerdos de la Habana privilegian la sustitución manual y concertada de cultivos de uso ilícito, el gobierno colombiano empeñado en incumplir su palabra, continúa con un modelo fallido de sustitución forzada que criminaliza a los campesinos cultivadores en todo el país.

Un modelo fallido de lucha contra las drogas

Desde el 2014 según cifras de la ONU los cultivos ilícitos se han duplicado llegando hasta 96.000 ha, lo que evidencia el fracaso de la lucha antidrogas. Detrás de ésta, financiada por EE.UU., se escondió una estrategia contra-insurgente de financiación y apoyo militar para cooptar territorios de influencia guerrillera bajo el pretexto de combatir los cultivos de uso ilícito.

Se privilegió la lucha contra los productores sin tener estrategias contra comercializadores y mucho menos consumidores - según la misma ONU en Estados Unidos se han duplicado las muertes por sobredosis en los dos últimos años -, lo que explica los pobres resultados. El ataque a los campesinos incluyó como técnica principal la aspersión con glifosato; por encima de las recomendaciones de la OMS en materia de salud, estuvo el negocio de EEUU Y Monsanto para la venta de este producto. Ha sido el ataque y no la concertación la que ha guiado a un Estado incapaz de brindar alternativas a las regiones que tienen al 70% de su población en la pobreza.

Diferente es la relación de la oligarquía con los comercializadores, ésta ha financiado los grupos narco-paramilitares que sostienen el negocio y durante muchos años los atacó solo aparentemente. ¿Por qué ahora pretende cambiar de modelo? Además de las cifras escandalosas para la comunidad internacional, al parecer le es más rentable la disposición de los territorios cultivados para la inversión transnacional en industria y agronegocio, una vez las organizaciones criminales se le han salido de las manos y el negocio ha bajado su rentabilidad.

La sustitución concertada de la Habana

El acuerdo de la Habana plantea una nueva forma de sustitución concertada con las comunidades, donde los cultivadores con apoyo de las FARC y el Estado Colombiano sustituyan los cultivos por proyectos productivos agroalimentarios, economías artesanales, industriales y de servicios. En el año 2017 se espera que se sustituyan 50.000 hectáreas.

Para la oligarquía ésta se convierte en una técnica para eliminar los cultivos en territorios de una fuerte base campesina y así acelerar su disposición para la inversión, mientras que para las FARC es la oportunidad de consolidar la creación de Zonas de Reserva Campesina con una alternativa de desarrollo rural producto de la sustitución de cultivos.

La concertación se dará según el acuerdo, a través de asambleas comunitarias quienes construirían el Plan Municipal Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo. El acuerdo aclara que la erradicación manual forzada procederá en lugares donde se rechace el proceso de concertación.

Las dudas por parte de las comunidades se centran en la capacidad productiva que los cultivos sustitutos tengan para reemplazar las ganancias de los actuales y sostener a las familias campesinas. Es por esto que exigen que el seguimiento se haga en esta vía y no se reduzca al desembolso económico, medidas que en el pasado han dejado endeudados a los campesinos con el sector privado. En todo caso, este modelo

privilegiaría la participación del campesinado en la construcción de modelos de desarrollo territorial, especialmente en la consolidación de las Zonas de Reserva Campesina.

Erradicación manual pero a la fuerza

Mientras las FARC se encuentran cumpliendo el cronograma de concentración y desarme pese a los múltiples incumplimientos del gobierno en la adecuación de las Zonas Veredales, el gobierno nuevamente incumple, en esta oportunidad en lo referente a la sustitución de cultivos.

El Ministro de Defensa señala que se crearán cuatro centros estratégicos de erradicación en Tumaco, Catatumbo, Caucasia y San José del Guaviare con el que se espera erradicar 100.000 ha de coca en el año. Los centros contendrán policías, soldados y funcionarios quienes se encargaran de dar información sobre la sustitución, y tendrán autonomía para contratar de manera express mano de obra para la erradicación forzada.

Contradice el gobierno el acuerdo porque impone metas diferentes, le da un papel predominante a la Policía Nacional y obvia el mecanismo de concertación. Esta política ya se viene implementando, pues en este año en el corregimiento Jardines de Sucumbios en Putumayo y Sabanalarga Antioquia a manos del ejército, y las veredas Birmania y El Recreo en el Caquetá al igual que en el departamento de Nariño a manos del ESMAD, el gobierno ha erradicado a la fuerza, sin haber intentado concertar.

La respuesta de la oligarquía a los justos reclamos de estas comunidades es la criminalización de la protesta. El Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, ya ha señalado que los cultivadores que defienden su oficio y se agrupan, están defendiendo las mafias. Así mismo se ha utilizado el Código de Policía para penalizar la protesta, siendo varios campesinos cultivadores agredidos por el ESMAD y acusados de agresión a servidor público.

Como lo dijo el ministro Pardo "Se ofrece la alternativa voluntaria, pero la coca es ilegal y el Gobierno no ha renunciado a erradicarla. No es contradictorio. Son dos caras de la misma moneda". La amenaza contra los campesinos y los pobres del país continúa. Si el gobierno colombiano sigue creyendo que la primera opción es la fuerza, los campesinos le demostrarán que también están dispuestos a enfrentar la violencia estatal.

Solo la participación protagónica del pueblo en el desarrollo de sus territorios podrá frenar el empeño de la clase dominante de usar la fuerza en contra de las mayorías. La sustitución debe ser concertada, vigilada y viable, los hechos y no las promesas son la verdadera muestra de voluntad política que el pueblo desea del Estado Colombiano.

Gabriel Antonio Gaitán

2017 Por la Paz

Con Justicia Social

Como continuación de las jornadas de movilización en el 2016 agrupadas en la "Minga Agraria, Campesina Étnica y Popular", la cruzada camionera y las expresiones de protesta y movilización popular de diferentes organizaciones sociales por sus reivindicaciones propias y la búsqueda de la paz; los primeros meses de este 2017 deja ver a lo largo y ancho del territorio nacional que la conflictividad social está en aumento, lo que demuestra que la construcción de la paz va más allá de silenciar los fusiles y requiere de cambios estructurales en el modelo económico y la concentración del poder político.

Al día de hoy ninguno de los acuerdos o compromisos del Estado con las organizaciones sociales y sectores populares se ha cumplido, se acude nuevamente a las movilizaciones de los maestros que buscan mejores condiciones laborales y un estatuto único docente; de los campesinos que exigen su reconocimiento político y una verdadera política de sustitución concertada para los cultivos de uso ilícito; de los pobladores urbanos y sus reclamos frente a los servicios públicos y derechos ciudadanos; del gremio camionero por condiciones laborales y los costos de la gasolina o los indígenas y afrodescendientes por su cultura y autodeterminación. De manera que los reclamos sociales no son atendidos como parte de una estrategia de los poderosos porque ellos solo buscan fortalecer sus privilegios.

En esta maniobra del régimen, el diálogo está dirigido a ser un medio de desgaste, dilación y desmovilización; con el que no se resuelven los problemas, sino que por el contrario, apenas los congela por un tiempo, mientras siguen creciendo, hasta que más adelante les estallan en las manos, confirmando que la protesta social y las vías de hecho continúan siendo el único mecanismo del pueblo para exigir sus derechos y reclamar ante la crisis política, social, ambiental y económica que agudiza la problemática de los sectores populares en Colombia.

Esta situación, enmarcada en un contexto de diálogos y negociaciones de paz con las insurgencias, obliga al gobierno a replanteamientos. Se debe prestar atención a los movimientos sociales que emprenden las protestas; no sólo en la resolución de sus demandas inmediatas y por las cuales se manifiestan, sino en el diseño de una paz verdadera, de manera contraria al camino de exclusión y represión vigente. Una paz verdadera obliga al reconocimiento e inclusión política de las organizaciones de la sociedad en la construcción de la nueva Colombia. Desde su participación, gestión y protagonismo, se podrían trazar rutas que elaboren políticas encaminadas a resolver las necesidades más sentidas de las comunidades, que rompan el círculo vicioso que impone el actual gobierno en los territorios en que a mayor riqueza material y natural, mayor exclusión social y más explotación.

Bajo este contexto es obligatorio exigir al gobierno, responder con el diálogo verdadero en busca de soluciones y cumplimiento a los pactos sociales y políticos acordados y no con la represión. La paz comienza con el cumplimiento de los acuerdos que se firman a nombre del gobierno y del Estado. La violencia oficial y los incumplimientos gubernamentales, son las causas que legitiman el derecho a la rebelión y la protesta social.

La solución política debe extenderse a todos los aspectos de la vida nacional y en especial a solucionar los conflictos sociales y demandas de las comunidades y sectores populares; en ese sentido convocamos a líderes populares, defensores de derechos humanos, activistas sociales, partidos políticos, hombres y mujeres patriotas y



en general a la sociedad en su conjunto a un Gran Dialogo Nacional que nos permita debatir y proyectar un país diferente con la solución al conflicto armado pero fundamentalmente que supere sus causas.

Es urgente que el gobierno deje su miedo a la participación del pueblo, deje de reprimir con violencia cruel las protestas sociales, abandone su vergonzoso pacto con el paramilitarismo y por fin escuche el clamor del pueblo, que exige ser el protagonista de los cambios que Colombia requiere.

Orlinda Guerrero

Impunidad de Lesa Humanidad

Aun cuando la firma del acuerdo de Justicia entre el gobierno y las FARC planteaba claramente el beneficio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para agentes del Estado, la rapidez con la que el Estado Colombiano ha tratado de implementar la entrada en vigencia para sus Fuerzas Armadas (FFAA) evidenciando la impunidad reinante en los crímenes de las Fuerzas Armadas Colombianas.

Mientras el gobierno colombiano tiene que salirle al paso a los interrogantes de la ONU sobre el cronograma de dejación de armas debido a su incumplimiento con la adecuación en las zonas veredales, los nombres de miles de miembros de las FFAA que se beneficiarán de la JEP estuvieron listos a menos de una semana de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de la República.

La preocupación de los militares retirados sobre la "persecución" que ésta pueda implicar para miembros de altos cargos de las Fuerzas Armadas es una muestra del descaro con el que estos han utilizado históricamente la justicia colombiana. Como lo han señalado, su preocupación es que la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan juzgar sus delitos como parte de los tribunales especiales para la paz, cuando esperaban que fuera la legislación interna la que se pronunciara sobre los delitos cometidos.

Este reclamo que desconoce el papel de asesoría de los organismos internacionales, de fondo tiene la resistencia de los militares a ser juzgados por el Derecho Internacional, por la conciencia plena que tienen de la gravedad de los crímenes cometidos contra el pueblo colombiano. En la JEP se encontraría una oportunidad de verdad que mostraría a la sociedad colombiana el nivel sistemático de sus crímenes.

A pesar de esto, lo que no cuentan las FFAA al país es que para altos cargos, al contrario de ser castigados serán beneficiados por la Jurisdicción Especial Para la Paz, situación que distintas organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales ya han señalado.

Con la implementación del apartado Tratamiento Penal Diferenciado Para Los Agentes Del Estado consignado en la ley de amnistía, han sonado los primeros nombres de militares cuyos procesos llevados por la Justicia Colombiana debido a su vinculación en violaciones al Derecho Internacional Humanitario, entrarán a ser parte de la Jurisdicción especial para la paz.

El nombre del General del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, se asocia a la responsabilidad intelectual por la Masacre de Mapiripán, cometida en 1997, por la que fue condenado a 37 años de prisión, condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Su entrada a la JEP significaría cambiar dicha sentencia proferida después de una larga lucha de organizaciones de víctimas y derechos humanos, disminuyendo la pena y el lugar de prestación de la misma.

Así mismo sucede con el caso del General Rito Alejo del Río, que investigado por su participación en la masacre de Mapiripán, le han sido comprobados sus vínculos con el paramilitarismo y ha sido condenado a 25 años de prisión por el asesinato del líder chocoano Marino López, crimen perpetrado en febrero de 1997.

No cabe en la cabeza de los colombianos como delitos graves ya juzgados por violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por quienes se suponen son los garantes de la seguridad y tranquilidad del país, puedan ser beneficiados en contravía a las víctimas. La cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en estos delitos y a la espera de participar en la JEP demuestran el grado de descomposición de esta institución





corrupta y criminal, ¿Que podemos esperar de una institución que diseñada para proteger a los colombianos se ha convertido en su principal agresora?

El Estado en su función de velar por la vida de los colombianos y colombianas parece negarse a asumir la responsabilidad de los delitos cometidos por sus miembros y sigue viendo en la JEP un salvavidas para la impunidad más que una oportunidad para decir la verdad al país y garantizar la no repetición de sus crímenes. Mientras las FARC ha tenido que recorrer todo el territorio nacional pidiendo perdón a las víctimas por sus acciones en el marco del conflicto, el pueblo sigue esperando el día en que el Estado recorra el país pidiendo perdón, no por la omisión, sino por la acción premeditada e indiscriminada de atacar a las mayorías nacionales a quienes debió proteger.

Arturo Solano

En Ecuador: Tres Pasos Adelente y Uno por Dar

En Ecuador se realizaron las elecciones para presidente y vicepresidente, miembros de la Asamblea Nacional, Parlamentarios Andinos y una consulta popular para que los funcionarios públicos y dignatarios, no puedan tener capitales en paraísos fiscales.

En los comicios del domingo 19 de febrero, sufragaron 10.470.174 electores en el proceso, equivalente a 81.63% de participación. Con un ausentismo de 2.356.754 votantes, es decir, el 18.37% de la población. Los votos blancos son de 286.069 y los nulos de 736.743. [1]

El presidente Correa y Alianza País solicitaron a la Corte Constitucional convocar a consulta popular preguntando si las autoridades electas por votación popular si deben o no poseer activos y capitales en paraísos fiscales, so pena de ser destituidos. Este Pacto Ético se le solicitó a los candidatos presidenciales, luego del escándalo de los Panamá Papers. El SI ganó en esta consulta con 55 por ciento, ganó la necesidad de transparencia con el pueblo.

Alianza País tuvo mayoría en la Asamblea (73 de 138 curules) y ganó en el Parlamento Andino. En la carrera presidencial el primer opcionado es Lenin Moreno del Movimiento Alianza PAIS, con 39.36 por ciento de los votos y el segundo opcionado es el banquero Guillermo Lasso de CREO (Creando Oportunidades), con

28.09 por ciento de los votos. Lenin Moreno para ganar en la primera vuelta debía obtener mínimo el 40 por ciento de los votos y, superar por lo menos con 10 por ciento de los votos a su siguiente contendor, lo cual no ocurrió, por lo que convocan a la segunda vuelta electoral el 2 de abril de 2017.

Ataque a los gobiernos democráticos y progresistas

En las recientes elecciones realizadas en Latinoamérica, la derecha de cada país, incluyendo la ecuatoriana, utilizan argumentos parecidos para desprestigiar el contrincante, es la técnica de las campañas sucias, donde la mentira se impone. El pueblo es inducido, por las grandes empresas de comunicación, quienes repiten a viva voz cada mentira.

La derecha transnacional avanza desde trincheras ideológicas, construidas desde la década de los 60, como la de asustar con que "se van a tomar el poder los comunistas". Cuando tambalean sus intenciones de llegar al gobierno generan sentimientos y acciones en contra de los candidatos contrarios declarando un supuesto fraude. Buscando la inestabilidad del país, para seguir manteniendo audiencia, extienden su campaña para incidir sobre la población que no es aun de sus simpatías.

La oligarquía, sus empresarios y banqueros, de conjunto con sus medios de comunicación defienden la democracia representativa enferma cuando les conviene, y otras veces atacan a las autoridades "democráticamente" establecidas tratando de colocarse como alternativa opositora válida, para recoger el inconformismo de las grandes mayorías.

En esta coyuntura atacan el "autoritarismo" de Correa y se alían con empresas transnacionales como el País de España y CNN para magnificar las acciones de protesta de la derecha; en una ofensiva mediática contra los gobiernos progresistas y de izquierda, cuestionando continuamente sus avances.

Los avances de la revolución ciudadana

El gobierno de Correa, en sus tres periodos ha mostrado importantes logros para el pueblo ecuatoriano; de avance en soberanía, como la expulsión de las bases militares norteamericanas del territorio ecuatoriano; además de importantes logros sociales.

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Latinoamérica, CELAG, revela que "entre los años 2006 y 2014 Ecuador tuvo un crecimiento del producto interno bruto que promedió 4,6 por ciento. La inversión pública tuvo un crecimiento promedio anual, entre 2007 y 2015, del 39 por ciento. La tasa de desempleo de 5,2 por ciento en diciembre 2016, es una de las más bajas de la región; cuando en el 2005 era del 9,6. En la primera década del siglo XXI la desnutrición crónica descendió del 30 por ciento al 23. En educación la tasa neta ajustada de asistencia a Bachillerato crece de 53,38 por ciento en 2007 a 68,93 en 2015; y en comparación con el 2006, hay 140 mil estudiantes más en la universidad. Entre los años 2006 y 2014 la pobreza medida por ingresos disminuyó de 37,6 por ciento al 22,5 y la pobreza extrema se redujo de 16,9 por ciento al 7,7. Se ha reducido la desigualdad en Ecuador, reduciendo el Gini del 0,45 en 2006 al 0,4 en 2014. El défi-





cit de pobreza de 15,5 por ciento en 2006 pasó a 8,4 en 2013; la miseria también se redujo de 8,6 por ciento a 4,4".

En Ecuador el éxito de la economía sigue dependiendo de la renta que generan las riquezas minerales. Algunos de los que aspiran a la no extracción de los recursos naturales, a la vez se alían al banquero Guillermo Lasso, enriquecido en la crisis de 1999, quien multiplicó su capital a costa de la estafa llamada Feriado bancario y de los ahorros de cientos de personas del pueblo ecuatoriano.

Ahora nuevamente le toca al pueblo

Lo dice la realidad ecuatoriana; no basta un buen líder y muchas obras para generar conciencia, se requieren las organizaciones políticas y sociales que construyan Poder Popular, para avanzar en los objetivos de largo plazo para transformar la sociedad.

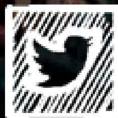
Los pueblos son sabios y sabrán escoger entre el modelo neoliberal y la posibilidad de seguir transformando un país desde sus necesidades y realidades económicas. Se requiere del pueblo unido y consciente, que se oponga a la oligarquía mundial que pretende re-imponer las dictaduras del capital.

En la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador está en juego la continuidad de los cambios para el pueblo de Nuestra América. Los oligarcas están acostumbrados a ganar por las buenas o por las malas e imponer sus programas en medio del shock. Esperamos que las raíces indígenas y comunitarias de esta sociedad estén a la altura del momento histórico, que plantea América y el mundo.

Esperamos que el pueblo ecuatoriano encuentre en su sabiduría y valentía la ruta para salir de la dependencia del capital, para seguir aportando en la unidad latinoamericana, para seguir aportando a la construcción de su propia paz con justicia social, aportándole también a la paz de Colombia y a la paz del continente. Lenin Moreno dijo el día de las elecciones, ya previendo la segunda vuelta, que "hay nuevas batallas por dar", hay nuevos espacios por disputar, esto es un camino largo.

Notas:

[1] Fuente: Consejo Nacional Electoral del Ecuador (https://resultados2017.cne.gob.ec/frmResultados.aspx)



@eln_voces